

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiocho (28) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONJUEZ PONENTE: HECTOR FABIO VELASCO HERNANDEZ

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE	76001-23-33-006-2015-00136-00
DEMANDANTE	MARIA CRISTINA SAAVEDRA YEPES pedroemilioms@yahoo.com
DEMANDADO	NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO:	RECHAZA DEMANDA

ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE Y MEMORIALES.

En aras del cumplimiento del artículo 46<sup>1</sup> de la Ley 2080 de 2021 que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, las partes cuentan con los documentos necesarios para formular sus alegaciones en la medida en que fueron notificados de todas las actuaciones surtidas en el proceso y se surtieron los correspondientes traslados.

La **Ley 2080 del 2021**, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El **expediente físico** fue digitalizado y puede consultarse en el repositorio **MERCURIO**, previa solicitud de acceso al siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU>. En el siguiente link encontrará un video tutorial para el ingreso: <https://bit.ly/3BQHMIIn>.

El **expediente digital** está en la sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **“CONSULTA DE PROCESOS”** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán **RADICAR MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es el canal oficial para recibir memoriales a partir del 16 de mayo de 2022.**

<sup>1</sup> Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtir en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y SIIIS apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, ; formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.



Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso **y cargar los archivos con destino al proceso** en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB.

En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co) identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

Auto Interlocutorio Nro. \_\_\_\_\_

## ANTECEDENTES

La señora María Cristina Saavedra Yepes a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pretende que se declare la nulidad de la Resolución nro. 1840 del 21 de julio de 2014 el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios; se inaplique los Decretos 658 del 4 de marzo de 2008, 723 del 6 de marzo de 2009, 1388 del 26 de abril de 2010, 1039 del 4 de abril de 2011, 0874 del 27 de abril de 2012, 1024 del 21 de marzo de 2013, 194 del 7 de febrero de 2014.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca y pague la prima especial de servicios establecida en la ley 4 de 1992, y el reconocimiento salarial de dicha prestación concerniente a la reliquidación de salarios, prestaciones sociales cesantías y pensión de jubilación y demás emolumentos dejados de percibir al que tiene derecho por haber ejercido como Juez de Ejecución de Penas del distrito Judicial de Cali, con retroactividad al 16 de febrero de 1994; se disponga la cancelación de las sumas debidas con efectos retroactivos ordenando los descuentos y ordene pagar a Colpensiones para los efectos de la correcta reliquidación de los derechos solicitados; se condene en costas.

## CONSIDERACIONES

Mediante auto del primero (01) de abril de 2022 se inadmitió la demanda, en razón a que no allegó copia de los recursos de reposición y apelación presentados contra la Resolución nro. 1840 del 21 de julio de 2014, para determinar si se dio cumplimiento al requisito de previo de procedibilidad.



Dentro del término legal, conforme con la constancia secretaria visible a índice 36 de la plataforma Samai se subsanó la demanda y se indicó que, “*la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutoriedad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, O NO SE INTERPONGAN RECURSOS o se renuncia expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos.*

*Este prolegómeno, salvo mejor criterio, lo estimo suficiente para expresar al despacho, que como quiera que no se INTERPUSO RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIARIO DE APELACIÓN y, por tanto el acto administrativo quedo en firme, por lo mismo se CONSIDERÓ AGOTADA LA VÍA GUBERNATIVA y se optó por acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, para que por vía del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declarara la nulidad del mismo”.*

Para resolver, se tiene que , el inciso 2° del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con el rechazo de la demanda, lo siguiente:

**“ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA.** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

...

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida....”

Frente a las obligaciones que tienen las partes, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-086 de 2016<sup>2</sup>, precisó:

*“[...] el proceso, como mecanismo a través del cual se materializa **el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el juez o incluso terceros intervinientes**, ‘ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos’. Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que una concreción del mandato previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual son deberes de la persona y del ciudadano ‘colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia’.*

(...)

**5.3.- La Corte ha señalado en forma insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional**, ‘en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia’. **Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia**, lo que desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional’.

[...]” (negritas y subrayas del Tribunal)

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016, Expediente D-10902, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado- Sección Segunda - Subsección B, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, en providencia del 17 de marzo de 2022, recordó acerca de la procedencia de los recursos en sede administrativa como requisito de procedibilidad, en los siguientes términos:

“ 3.4. De la procedencia de los recursos en sede administrativa como requisito de procedibilidad

11. El agotamiento de los recursos en la actuación administrativa constituye un presupuesto procesal necesario para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual cumple con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del ciudadano frente a la Administración, y la oportunidad para que ésta reevalúe sus actos administrativos, y si es del caso, adicione, aclare, modifique o revoque su decisión inicial.

12. El artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, al regular la notificación personal de las decisiones administrativas, estableció que en la diligencia de notificación se debe entregar al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, indicándosele los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. [...]» (Negrillas fuera de texto).

13. De acuerdo con el precepto normativo anterior y en lo relacionado con los recursos, el legislador establece a cargo de la administración, el deber de indicarle a la parte interesada con toda precisión los recursos que conforme al ordenamiento resultan procedente ejercer contra la decisión administrativa.

14. En ese orden, el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró que los recursos que proceden contra un acto administrativo son los siguientes:

«ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. [...]».

15. De tal manera que, el recurso de: i) reposición tiene como finalidad poner en consideración de la autoridad administrativa que profirió el acto, los argumentos necesarios para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione y, ii) apelación es considerado como obligatorio, en el sentido de que es ineludible su ejercicio para agotar la vía gubernativa. En este caso, la reconsideración del asunto objeto de discusión, se pone en manos del inmediato superior administrativo de quien expidió el acto.

16. Ahora, es pertinente indicar que el recurso de reposición es un medio de impugnación facultativo, es decir, queda al arbitrio de la parte interesada ejercerlo o prescindir de él. Contrario sensu, la norma establece que el recurso de apelación o también llamado de alzada, es de carácter obligatorio, de suerte que, para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe ser ejercido en debida forma, ya sea interponiéndolo directamente contra la decisión administrativa o como subsidiario del recurso de reposición.

17. Por otro lado, el numeral 2° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, estableció lo siguiente:

*«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:*

*[...]*

*2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto [...]» Subrayado fuera de texto.*

18. De conformidad con la norma transcrita, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios, por lo que se constituye en un requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, el previo agotamiento del procedimiento administrativo.

19. Sobre el particular, esta Corporación en sentencia del 30 de julio de 20189 se pronunció sobre el presupuesto procesal de agotamiento de los recursos administrativo, considerando que:

*«[...] la exigencia en comento recae en relación con el recurso de apelación y tiene como propósito satisfacer la necesidad de usar los recursos legales obligatorios para impugnar los actos administrativos, de manera que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas, modificarlas o aclararlas antes de que el juez, con ocasión de la puesta en marcha del aparato judicial, estudie su legalidad».*

20. Sin embargo, contrario a lo dispuesto en líneas anteriores, en auto de fecha 15 de octubre de 201910, con ponencia del Doctor Carmelo Perdomo Cuéter, la Sala dispuso lo siguiente:

*«Revisado la anterior actuación encuentra la Sala que la Resolución RDP 10734 de 2015, para referirse a la procedencia de los aludidos medios de impugnación contra este acto, no cumple la carga de informar con exactitud si procede o no el recurso de apelación (reposición y/o apelación), para lo cual, ante esa confusión, no se le puede exigir a la interesada que lo hubiera interpuesto. [...]*

Así las cosas y en atención a que la actora, no fue informada en debida forma de los recursos que procedían contra la Resolución RDP 10734 de 2015 y no se le brindó la oportunidad de impugnar el auto ADP 1375 de 2019, resulta desproporcionado y contrario a derecho rechazarle la demanda porque no cumplió un rigorismo procedimental que no le era exigible.

En esas condiciones y en aras de privilegiar el derecho de acción, se tiene que en el asunto sub examine no es exigible el requisito de procedibilidad a que se hace referencia el artículo 161 (numeral 2) del CPACA, motivo por el cual se revocará la providencia objeto de alzada, para que el Tribunal de origen continúe con el correspondiente trámite»”.

Como se puede colegir de lo anterior, se tiene que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como en el sub judice es obligatorio la presentación del recurso de apelación, siempre y cuando proceda, con el fin de agotar la actuación administrativa, puesto que dicho requisito es sine qua non, para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En el presente asunto se observa que el acto administrativo demandado en su parte resolutive, numeral 2 dispuso ( folio 19 anverso):

**“ARTICULO 2. Contra la presente Resolución proceden los Recursos de Reposición ante esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y el de Apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración**

***Judicial con sede en la ciudad de Bogotá; para los cuales se concede un término de diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 74 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo...(negrillas por fuera de texto)”.***

Se tiene que en el presente asunto, el acto demandado de manera clara y expresa indicó los recursos procedentes, entre los cuales se encuentra el de apelación, el cual como se vio en la jurisprudencia transcrita y conforme con el CPACA es de obligatorio cumplimiento para agotar la actuación administrativa y constituye un requisito de índole procesal de admisibilidad, conforme con los lineamientos del artículo 161 numeral 2 del CPACA.

Por lo anterior, los argumentos de la parte demandante consistentes en que el acto administrativo quedó en firme al no haberse agotado los recursos y que se consideró tener por agotada la actuación administrativa no tienen asidero jurídico, como quiera que debió agotarse el recurso de apelación para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa teniendo en cuenta además que el acto administrativo demandado expresamente señaló su procedencia y término para su interposición.

Concluye entonces la Sala, que como quiera en el presente asunto la demandante no subsanó la demanda, la misma deberá ser rechazada con fundamento en los artículos 169 numeral 2º y 170 del CPACA.

Por lo anterior, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala de Decisión,

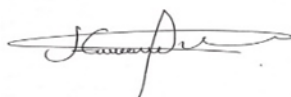
#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: RECHAZAR** la presente demanda, por las razones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO:** En firme la presente providencia, procédase al archivo del plenario y a la cancelación de la radicación, previas las anotaciones de rigor en el sistema SAMAI.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta Número. \_\_\_\_).

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**



**HECTOR FABIO VELASCO HERNANDEZ**  
**Conjuez Ponente**

RADICACIÓN  
Medio de control  
Accionante  
Accionado

: 2015-00136-00  
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL  
: MARIA CRISTINA SAAVEDRA YEPES  
: NACIÓN -RAMA JUDICIAL - DESAJ

